



La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, junto al presidente de la patronal FOPA, Javier Verdú, en una imagen de archivo. R. P.

Los constructores lanzan un SOS

La patronal FOPA plantea a los partidos un giro radical en las políticas de obra pública para revitalizar a un sector afectado por el desplome de la inversión en infraestructuras y la desaparición de las concesiones

F. D. G. ALICANTE

Los contratistas de obras públicas ven necesario un cambio de rumbo total para la actividad después de que las restricciones presupuestarias de las distintas administraciones como consecuencia de la crisis hayan dejado malherido al sector. Por ello, la Federación de Obra Pública de la Provincia de Alicante (FOPA), aprovechando las distintas campañas electorales de los comicios generales autonómicos y locales, ha planteado una especie de tratamiento de choque para tratar de revitalizar un negocio que no acaba de sumarse del todo a la recuperación de la economía.

La patronal sostiene que es el momento ideal para poner encima de la mesa las principales reivindicaciones del sector, que lo que principalmente demanda es que las administraciones (central, regional y local) modifiquen sus políticas de obras públicas. Ya no piden más licitaciones ni más inversión, sino que los procesos de contratación sean más claros y ágiles, y que el sector público en general cumpla con los presupuestos y los proyectos de inversión ya aprobados.

Las propuestas se han plasmado en un documento denominado «Los 6 objetivos fundamentales a conseguir», que se enviará a todos

los partidos políticos para que lo incluyan en los distintos programas electorales.

Entre estas propuestas destaca la puesta en marcha de una «base de precios a nivel autonómico que sirva de referente y que unifique y actualice los precios de construcción para evitar las disparidades de precios que se producen actualmente en proyectos de similares características». Desde FOPA también apuestan por «potenciar la unificación de los pliegos de licitación, eliminando las adjudicaciones de contratos en situación de bajas temerarias», así como la «exigencia a las distintas administraciones del cumplimiento íntegro de sus presupuestos y planes de inversión anuales aprobados».

Los constructores insisten en «fomentar la colaboración público-privada como procedimiento de generación de inversión en obra pública y de contratación», y en «desarrollar con urgencia nuevos módulos de formación profesional para construcción que resuelvan la actual carencia de mano de obra cualificada en nuestra Comunidad en prácticamente todos los oficios». La patronal también propone «modificar el sistema de clasificación de las empresas, cuya tramitación a efectos de acreditación sea coherente con la bajísima lici-

DATOS

258 M €

Alicante. La inversión en obra pública en la provincia llegó a los 258 millones de euros en 2018, un 8,8% más que el año anterior gracias al impulso de las entidades locales y ayuntamientos. En 2008 se invirtieron en Alicante, por parte de las todas las administraciones, nada menos que 1.122 millones.

12 M €

Concesiones. Las administraciones apenas licitan obras de este tipo –las empresas construyen y explotan el proyecto–. El Estado ha licitado sólo una concesión, por seis millones de euros, en los últimos 12 años en la Comunidad, mientras que la Generalitat ha impulsado también una sola concesión –valorada en seis millones de euros– en los últimos nueve años

tación producida en los diez años anteriores».

FOPA ha propuesto la creación de un Observatorio de la Construcción, integrado por los tres niveles

de las administraciones y las federaciones empresariales sectoriales, «para analizar la planificación y los niveles de inversión en obra pública» en Alicante.

EL CONTEXTO

Los contratistas de obra pública lanzan esta batería de medidas en un momento en el que el sector sigue a la baja. No en vano, la inversión en obra pública en la provincia de Alicante llegó a los 258 millones de euros en 2018, un 8,8% más que el año anterior gracias al impulso de las entidades locales y ayuntamientos. Sin embargo, el volumen de inversión actual en infraestructuras se encuentra todavía muy lejos de los niveles alcanzados antes de la crisis. Por ejemplo, en 2008 se invirtieron en Alicante, por parte de las todas las administraciones, nada menos que 1.122 millones de euros.

Además, las concesiones –las empresas construyen y explotan el proyecto– también están bajo mínimos. Las administraciones apenas licitan obras de este tipo. El Estado ha licitado sólo una concesión, por seis millones de euros, en los últimos 12 años en la Comunidad, mientras que la Generalitat ha impulsado también una sola concesión –valorada en seis millones de euros– en los últimos nueve años.

Colomer admite que al turismo aún le falta más «prestigio social»

E. A. ALICANTE

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, mantuvo ayer un encuentro con el Club de Empresas de la Cámara de Alicante donde compartió sus reflexiones sobre calidad y modelos de gobernanza. Colomer mostró la apuesta de Turisme Comunitat Valenciana por la colaboración público-privada en el sector turístico como clave para afrontar los nuevos retos. Para Colomer, «la calidad debe formar parte de toda estrategia de futuro para adquirir relevancia y fidelizar clientes en un momento de cambio permanente».

El responsable de Turisme CV planteó tres retos del sector: el reconocimiento social de la actividad turística, la transformación digital del sector y la apuesta de la hospitalidad y la formación para garantizar la calidad. Respecto a conseguir el prestigio social, Francesc Colomer señaló que «todavía no hemos logrado el reconocimiento social del turismo, ni en las instituciones ni en la percepción que se tiene del valor de esta industria en el conjunto de la economía, y debemos trabajar para afrontar un camino de reputación».

El secretario autonómico recalzó que «en la transformación digital, la gestión de los datos es el futuro, y por eso desde Turisme hemos creado ya la oficina de asistencia técnica para DTI, donde ya hay más de 30 destinos inmersos en esta estrategia». Además, insistió en que «debemos combinar todos estos retos con el tercero, la hospitalidad y la formación entendidos como valores diferenciales y competitivos para garantizar la calidad de nuestra oferta y atención al turista».

DECRETO

El secretario autonómico de Turismo y su director general participaron también en la Comisión de Turismo de la Cámara de Alicante, para trabajar sobre el decreto de alojamiento en el sector turístico.

Colomer destacó que «hemos venido para seguir trabajando con el sector y acordar un texto en el que todos se vean reconocidos» y añadió que «debemos encontrar el punto de intersección en el que todos nos sintamos más fuertes y con capacidad de afrontar el presente y el futuro». La Cámara está pendiente de presentar sus alegaciones al decreto que ultima la Generalitat.